



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, siete de marzo de dos mil veintitrés

D21-065

Proceso: **SENTENCIA COMPLEMENTARIA-CONSULTA**
Demandante: **PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARREDONDO**
Demandado: **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA**
Intervinientes: **MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA**
Radicado No.: **05001-31-05-002-2008-01109-01**
Decisión: **ADICIONA la sentencia proferida el 18 de agosto de 2015 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, , REVOCANDO la decisión respecto a las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, mediante Auto AL3490-2020 a través del cual se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto proferido por la Sala el día 24 de noviembre de 2015 por medio del cual se admitió el recurso de casación formulado por la demandante Piedad del Socorro Ángel Arredondo, contra la sentencia del 18 de agosto de 2015 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, el cual se declaró improcedente por anticipación, ordenándose que se adoptaran los correctivos procesales pertinentes para surtir al grado jurisdiccional de consulta que se omitió en favor de MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA quienes fueron vinculadas como intervinientes y obtuvieron una sentencia absolutoria en primera instancia, procede a adicionar la referida sentencia de segunda instancia, conociendo en el grado jurisdiccional de consulta a favor de las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA.

Se aclara que si bien en el auto que dio traslado para alegatos fechado del primero de septiembre de 2021 se indicó que se admitía el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la consulta de las intervinientes, esto se trató de un lapsus, pues en primer lugar la sentencia no fue apelada por la demandada y además en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en el auto referenciado el proceso solo debía conocerse en el grado de consulta frente a las intervinientes, ya que existe una sentencia ejecutoriada que CONFIRMÓ la sentencia ABSOLUTORIA respecto a la señora PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARREDONDO, la cual no fue anulada por la Corte Suprema, que solo dispuso que este Tribunal debía pronunciarse en cuanto a la consulta que

omitió respecto a las intervinientes, por lo que no hay lugar a emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la señora ÁNGEL ARRENDONDO, pues según lo dispone el artículo 287 del C.G.P. *“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”*. Es decir, que no se trata de decidir sobre asuntos ya resueltos, ya que la sentencia goza del atributo de inmodificabilidad, sino de una **ADICIÓN** o **COMPLEMENTACIÓN** sobre un punto que se omitió resolver, que si bien en este caso se está haciendo por fuera del término de ejecutoria, lo es en cumplimiento de la orden del superior para salvaguardar el derecho al debido proceso de las intervinientes a quienes se les pretermitió un grado jurisdiccional al cual tenían derecho por disposición del artículo 69 del C.P.T. y la S.S., que dispone que cuando la sentencia se adversa a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán consultadas si no fueren apeladas, por tanto al haberse presentado la demanda de intervención, así fuera a través de curador, y no haber salido avante las pretensiones tenían derecho a que la decisión fuera revisada por el Tribunal en el grado de consulta, lo que en efecto no se hizo, por lo que en esta oportunidad, se emitirá sentencia complementaria, para decidir sobre este aspecto.

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones el Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 07** de discusión, que se adopta en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

La señora PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARRENDONDO presentó demanda en contra de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA para que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes de origen profesional en calidad de cónyuge del señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ ACEVEDO, los intereses moratorios y/o indexación y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones adujo que cuando falleció su cónyuge se encontraba laborando como mayordomo al servicio del señor JUAN CARLOS TORO TORO propietario de la HACIENDA LA SUEIZA ubicada en el municipio de Titiribí (Ant). Indicó el 27 de marzo de 2003 a las 6:30 p.m. mientras el señor RUÍZ ACEVEDO cumplía funciones propias de su cargo de mayordomo fue asesinado por dos sujetos que ingresaron a la finca y le dispararon, por lo que es claro que se trató de un accidente de trabajo, ya que dentro de sus funciones estaban las de vigilancia de la finca, por lo que se le debe reconocer la pensión en calidad de cónyuge ya que convivía con el causante desde que se

casaron, de cuya unión procrearon al joven MAURICIO RUÍZ ÁNGEL, en actualidad mayor de edad.

Por su parte SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones e indicando que a la actora no le asiste derecho a la pensión deprecada por cuanto el suceso en el que perdió la vida el señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ ACEVEDO fue catalogado como de origen común y su muerte no tiene relación de causalidad con sus funciones laborales, teniendo en cuenta que de la misma declaración de la demandante PIEDAD DEL SOCORRO ANGEL ARREDONDO se desprende que las personas que lo asesinaron preguntaron directamente por él, lo cual indica que los móviles de su homicidio no tienen relación con la actividad laboral desempeñada sino que se evidencia que se trató de motivos personales. Además el patrullero que atendió el caso del asesinato del señor RUÍZ ACEVEDO informó al grupo de investigaciones técnicas de la ARP que el asesinato había sido atribuido a los paramilitares y al parecer era un ajuste de cuentas personales.

Por auto del 24 de febrero 2010 (fl 81) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dispuso notificar la existencia de la demanda a las señoras MARIA ELENA ROJAS y GLORIA PATRICIA LOAIZA en calidad de intervinientes ad excludendum, a fin de que si lo consideran se hagan parte en el proceso como parte activa, reclamando el presunto derecho que les disputa la actora. Sin embargo, al no lograr su notificación, después de haber sido emplazadas, el a quo por auto del 6 de julio de 2011 les nombró curador ad litem (fl 120) para que representara sus intereses, quien presentó demanda en nombre de ambas, solicitando se les reconociera el derecho a la pensión de sobrevivientes de origen profesional con ocasión del fallecimiento del señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ ACEVEDO. Sin embargo, frente a la señora MARIA ELENA ROJAS señaló que no se observaba que esta le asistiera algún interés en participar en el proceso en calidad de interviniente ad excludendum, toda vez que como figura en el expediente a folio 26 esta solo participó como declarante a favor de la señora GLORIA PATRICIA LOAIZA, para manifestar que esta última tenía 2 hijos con el occiso.

1.2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 31 de julio de 2012, **ABSOLVÓ** a **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA** de todas las pretensiones impetradas en su contra por la señora **PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARREDONDO** y las señoras **GLORIA PATRICIA LOAIZA** y **MARIA ELENA ROJAS**, representadas por curador ad litem quienes fueron llamadas al proceso en calidad de intervinientes ad excludendum. **CONDENÓ** Ene costas a la

demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$566.700 y como gastos de curaduría \$566.700.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló el a quo que conforme a la prueba recaudada no se podía concluir la muerte del señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ ACEVEDO hubiera sido de origen profesional, pues no se probó que la muerte fue con ocasión de sus funciones, ya que si bien el deceso se presentó dentro de la finca donde laboraba, también lo es que su asesinato fue un acto atribuido a los paramilitares que operan en municipio de Titiribí donde está ubicada la finca y tal situación obedeció a un ajuste de cuentas, por lo que no se evidencia un nexo causal entre las actividades desarrolladas por el causante dentro de la finca y la agresión del que fue objeto por tanto concluyó el a quo que la muerte del señor RUÍZ ACEVEDO no obedeció al cumplimiento de sus funciones labores, sino que fue por causas personales, por lo que ABSOLVIÓ a la entidad accionada de todas las pretensiones incoadas en su contra tanto la demandante como por las intervinientes ad excludendum.

2.2. CONSULTA

La decisión anterior fue apelada únicamente por la demandante PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARREDONDO, por lo que el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Descongestión Laboral a través de sentencia del 18 de agosto de 2015, CONFIRMÓ la referida sentencia, sin embargo en esta oportunidad, solo se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la demandante pero omitió conocer en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA, conforme lo dispone el artículo 69 del CPT Y la S.S. quienes fueron vinculadas como intervinientes y obtuvieron una sentencia absolutoria en primera instancia, razón por la que mediante Auto AL3490-2020 la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, remitió el proceso para adoptar los correctivos procesales pertinentes.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término de traslado ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

El problema jurídico se centra en determinar si fue acertada la decisión del a quo de proferir una sentencia ABSOLUTORIA respecto de las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA, que fue vinculada como interviniente ad excludendum.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Respecto a la señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA frente a la cuales se conoce en el grado jurisdiccional de CONSULTA, estima la Sala que se dio una irregularidad en el trámite de su vinculación al proceso, pues si bien inicialmente se les vinculó como interviniente ad excludendum, como se ordenó en auto del 24 de febrero 2010 (fl 81), realmente su intervención se tramitó como si se tratara de litis consortes necesarias, pues se les nombró curador ad litem que presentó demanda a su nombre, lo que implicó su intervención forzosa en el proceso, que finalmente llevó a una sentencia absolutoria en su contra que hace tránsito a cosa juzgada.

Pues bien, el artículo 63 del C.G. del P. reguló la intervención excluyente o intervención ad excludendum indicando que:

*“Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, **podrá** intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca”. (subrayas fuera de texto).*

De la lectura de la norma se colige que la intervención excluyente es una figura de carácter facultativo, ya que este tercero que tiene intereses en el derecho pretendido tiene la posibilidad de acudir o no al proceso presentando una demanda para disputar el derecho en litigio o bien puede abstenerse de intervenir y presentarse a un nuevo proceso.

De otro lado, el artículo 29 del C.P.T. y la S.S. dispone que en materia laboral hay lugar a emplazamiento y nombramiento de curador ad litem, cuando el demandante manifieste bajo juramento que ignora el domicilio del demandado, para que lo represente, ya que la comparecencia de éste al proceso sí es obligatoria.

Así mismo, para la Sala es claro que tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de junio de 1999, radicación 11862 reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, los pretendidos beneficiarios de una pensión de sobrevivientes no son Litis consortes necesarios en un proceso sino que son contrapartes por lo que deben acudir al proceso

unos como demandantes y otros como *intervenientes "ad excludendum*, pues estos habrán de formular su pretensión frente a demandante y demandado, de conformidad con el artículo 53 del C.P.C., y si no se llaman en esta calidad, o no comparecen al proceso, esta omisión no genera ningún tipo de nulidad, puesto que el otro beneficiario tiene la facultad de acudir a un nuevo proceso para demandar la pensión de sobrevivientes trabando la Litis contra la Administradora de Fondo de Pensiones y contra el otro beneficiario en caso de que ya le haya sido otorgada la prestación.

Por consiguiente, es claro que este proceder, al habérseles designado un curador ad litem a las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA, quien presentó demanda a su nombre, implicó no solo su intervención forzosa en el proceso, sino una indebida representación de las partes, quienes debieron comparecer presentando una demanda a través de apoderado judicial designado por ellas, con el fin de que defendiera sus intereses y entrar a disputar la pensión de sobrevivientes aportando las pruebas que, en calidad de compañeras permanentes, tuvieran a su favor para demostrar su calidad de beneficiarias. Sin embargo, al haber estado representadas por un curador ad litem, se les privó de la oportunidad de poder disputar el derecho en igualdad de condiciones que la demandante PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARRENDONDO, lo que conllevó una sentencia ABSOLUTORIA en su contra, en un proceso del que probablemente no tuvieron conocimiento, ya que no se logró su notificación y que hace tránsito a cosa juzgada, cercenándoles la posibilidad de que en un futuro puedan presentar demanda en busca de la aludida pensión de sobrevivientes.

En consecuencia, esta Sala REVOCARÁ la decisión ABSOLUTORIA que se produjo en contra de las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA y se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo frente a ellas, pues no estaban obligadas a comparecer al proceso.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será REVOCADA PARCIALMENTE, según lo explicado en precedencia

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: ADICIONA la sentencia proferida el 18 de agosto de 2015 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, la cual quedará así:

SEGUNDO: MODIFICA el numeral primero de la sentencia del Juzgado Dieciocho Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, **REVOCANDO** la decisión proferida respecto a las señoras **MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Se dispone **REMITIR** el expediente a la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, magistrado ponente MARTIN EMILIO BELTRÁN QUINTERO, para que se continúe con el trámite del recurso de extraordinario de casación interpuesto por la demandante PIEDAD DEL SOCORRO ANGEL ARREDONDO contra la sentencia del 18 de agosto de 2015 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, que se había declarado improcedente hasta que se conociera la consulta frente a las intervinientes ad excluendum.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **PIEDAD DEL SOCORRO ÁNGEL ARREDONDO**
Demandado: **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA**
Intervinientes: **MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA**
Radicado No.: **05001-31-05-002-2008-01109-01**
Decisión: **ADICIONA la sentencia proferida el 18 de agosto de 2015 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, MODIFICANDO el numeral primero, REVOCANDO la decisión respecto a las señoras MARIA ELENA ROJAS Y GLORIA PATRICIA LOAIZA.**

Fecha de la sentencia: **07/03/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **08/03/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario